

Los idus de marzo: ¿Crisis política, crisis de los media?

Joan Botella

- *"En la República romana, los "idus de marzo" celebraban al dios Marte; según la tradición, la sublevación contra Julio César tuvo lugar en esta fecha"*

Los hechos acaecidos en España entre el 11 y el 14 de marzo de 2004 serán en el futuro objeto de análisis y estudio desde múltiples perspectivas. La asociación directa de los atentados en las estaciones de Madrid con la movilización ciudadana subsiguiente, la reorientación electoral en las urnas o la redefinición política que se derivó de ellos plantean un sinfín de preguntas en torno a cuestiones esenciales, desde la seguridad interior hasta la política internacional española, pasando por el impacto electoral de los atentados o las características de la opinión pública de nuestro país.

Entre estas cuestiones esenciales, uno de los interrogantes capitales será el de mesurar el papel y el peso efectivo desempeñado por los procesos de elaboración y difusión de la información a lo largo de toda la crisis. (Evito deliberadamente referirme a los *medios de comunicación*, ya que uno de los elementos clave de esos días, como se discutirá posteriormente, fue precisamente la abolición del modelo lineal de influencia unidireccional, «estímulo-respuesta», desde los media hacia los ciudadanos y ciudadanas.)

Los materiales contenidos en este número de *Quaderns del CAC* exploran exhaustivamente la actuación de los medios de comunicación a partir de los atentados del día 11 de marzo. En este texto, nos centraremos en dos cuestiones íntimamente relacionadas pero distinguibles en términos intelectuales y analíticos: el proceso de construcción de

un *relato mental* compartido (y sus inmediatas consecuencias políticas) y la existencia o no de espacios de *neutralidad política* en una sociedad democrática.

Es probable que en este momento ya no lo recordemos, pero la percepción social fluctuó considerablemente a lo largo de los cuatro días de marzo, al compás de los *inputs* que recibía la opinión pública. No se recuerda suficientemente que la primera autoridad que tomó la palabra el día 11, en una rueda de prensa improvisada a las 9.30 horas, fue el lendakari Ibarretxe para condenar los atentados y subrayar que las reivindicaciones del pueblo vasco no se podían defender con la violencia. En otras palabras, se trataba exactamente del discurso estereotipado que se aplica desde el nacionalismo vasco hegemónico ante las acciones de ETA. La deducción era inequívoca: el Gobierno vasco atribuía —tácitamente— el atentado a ETA.

Esta interpretación no resultaba inverosímil: pocos meses antes fue interceptada una camioneta en una carretera de Cuenca que circulaba en dirección Madrid y que transportaba una cantidad importante de explosivos. Se especulaba, por tanto, con la posibilidad de la reiteración de un atentado en algún gran espacio público de Madrid, similar a la bomba de la plaza de Callao pocos meses antes. Hasta tal punto era verosímil la hipótesis de una acción que el mismo día 11 de marzo, a las 10.00 horas, la emisora radiofónica pública líder de Cataluña emitía una entrevista en directo con Josep Lluís Carod-Rovira en la que, en un momento dado, el entrevistador pregunta a Carod: «¿Se atreverá a ir a los funerales?»

Posiblemente, el elemento clave de lo que pasó en los cuatro días de marzo fue el de la reconstrucción mental, por parte de millones de ciudadanos, de los hechos, de sus interpretaciones y, sobre todo, de las sucesivas versiones que se iban dando. La pregunta que se formulaba en las manifestaciones era «¿Quién ha sido?», que conducía

Joan Botella

Miembro del Consejo del Audiovisual de Cataluña

desde el interés y la angustia iniciales hasta la desautorización moral de quien estuviese disimulando la autoridad de los crímenes. Con independencia de lo que puedan deparar las investigaciones formales de carácter judicial, o los resultados de la comisión de investigación parlamentaria, la opinión pública española se formó rápidamente un veredicto: podía haber dudas acerca de su autor, pero en cualquier caso el Gobierno español apuntaba en una dirección diferente de la que señalaban, de forma abrumadora, multitud de pistas. La existencia de una gran pluralidad de medios fue decisiva: recurso a Internet, a la prensa extranjera (¡de nuevo!); en cambio, no hubo rumores, aquellas oleadas de medias verdades que a veces se apoderan de las opiniones públicas.

Asimismo, no se registraron reacciones agresivas o violentas contra las comunidades musulmanas existentes en España, ni siquiera se oyeron gritos de venganza, manifestaciones patriotas, alzamientos de bandera o actos parecidos. La opinión reaccionó, sobre todo, en clave de solidaridad con las víctimas y sus familiares y, en segundo lugar, en clave de pregunta («¿Quién ha sido?»). Cuando las respuestas que se recibían chocaban frontalmente con las evidencias, las preguntas se transformaron en indignación.

¿Tuvieron los atentados impacto electoral? Por supuesto que sí. Pero formulemos de nuevo la pregunta: lo que se quiere decir, muchas veces, es si los atentados y los hechos subsiguientes desequilibraron las preferencias electorales de los españoles y transformaron la previsible victoria del PP en un éxito socialista. ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta?

Con algunas pequeñas fluctuaciones, los distintos estudios preelectorales mostraban una ventaja del PP sobre el PSOE, que se había ido reduciendo a lo largo del año 2003. El enorme cambio en el ambiente político respecto de la anterior legislatura (en la que coincidieron una coyuntura económica extraordinariamente favorable y una mayoría relativa del PP que lo habían conducido, quieras o no, a un entendimiento con los nacionalistas periféricos) había generado una situación en que el PP se había quedado sin posibles socios de coalición: por tanto, el reto electoral del PP era conseguir la mayoría absoluta, ya que no parecía fácil que pudiese recuperar buenas relaciones con otra fuerza política (salvo, quizás, Coalición Canaria). Este era el

punto sobre el que las encuestas previas no definían un pronóstico claro: la victoria del PP se daba por sentada, pero lo que no estaba claro era el margen de esta victoria. ¿Podía conseguir el PP una victoria con una mayoría suficiente para gobernar en solitario? Estas eran las especulaciones en torno a las últimas encuestas publicadas los días 7 y 8 de marzo.

Las dimensiones de las incertidumbres eran notables. En primer lugar, la renovación de los liderazgos de los distintos partidos políticos había llevado a la aparición de caras nuevas al frente de la gran mayoría de las candidaturas, tanto a escala española (Rajoy, Rodríguez Zapatero o Llamazares) como catalana (con la aparición de Montilla, Puigercós o Herrera), con incertidumbres alrededor del atractivo de unos y otros. De hecho, los comportamientos de Aznar en la última etapa de los gobiernos del PP se pueden interpretar en clave electoral, asumiendo todas las responsabilidades de la etapa política anterior para dejar el terreno limpio a un candidato de apariencia más «simpática» como Rajoy.

En segundo lugar, a pesar de que las movilizaciones populares muy masivas no tienen, necesariamente, traducción electoral (porque, al ser movilizaciones muy transversales, afectan de una manera más o menos parecida a todos los distintos electorados), el escándalo en la opinión pública generado por la participación española en la guerra de Iraq zarandeó con fuerza las conciencias y asistimos a fenómenos de movilización pocas veces (o nunca) vistos.

En este contexto, las elecciones municipales de mayo de 2003 habían arrojado unos resultados ambiguos. Por supuesto, el PP las presentó como una victoria, ya que mantuvo todas sus posiciones relevantes y consiguió logros simbólicamente importantes, como la reconquista del Gobierno de las Baleares. La única victoria socialista, la posible coalición de izquierdas en el gobierno de la Comunidad de Madrid, se vio frustrada pocos días después por la defección de dos diputados socialistas corruptos.

Sin embargo, por primera vez en unas elecciones desde 1993, el PSOE obtenía más votos que el PP; por primera vez el PP, pese a ganar tanto en Madrid capital como en la Comunidad, lo hacía sin mayorías absolutas. Asimismo, se dijo que, a pesar de la catástrofe del *Prestige*, el PP había ganado igualmente las alcaldías de la costa gallega, incluida la de Muxia, donde la marea negra fue más dramática;

pero se dijo poco que en Muxia el PP había pasado del 78% de los votos al 51%.

Es decir, si se rastreaba con detalle el conjunto de los resultados de las elecciones municipales y autonómicas de 2003 se apreciaban grietas en las bases del electorado popular.

Asimismo, en el período anterior a las elecciones de marzo de 2004, la superioridad del PP en términos de intención de voto se vio acompañada de un conjunto de indicadores que manifestaban la fragilidad de este pronóstico. Así las cosas, por citar un ejemplo, el Instituto Opina detectó (en una encuesta realizada entre el 27 de febrero y el primero de marzo, con una muestra de n=4.000) que, en efecto, el PP era el partido preferido por un 42% de los posibles votantes, mientras que el PSOE tenía una intención de voto del 38%. De modo parecido, la calificación que obtenía Rajoy era levemente superior a la de Rodríguez Zapatero (5,0 por 4,8, en una escala de 0 a 10); y, finalmente, casi dos tercios de los electores (65,7%) anticipaban una victoria electoral popular, por sólo un 11,6% que creían en la posibilidad de la victoria del PSOE.

Pero al lado de estas había otras informaciones. Por ejemplo, más de la mitad de los encuestados afirmaba la necesidad de un cambio de gobierno (55,2%), mientras que menos de un tercio (30,4%) manifestaba su deseo de continuidad. Muy pocos encuestados, el 12%, creían las afirmaciones de Aznar sobre la existencia de armas de destrucción masiva en Iraq, afirmaciones que negaba casi un 80%. Por otro lado, se notaba el cambio en el «número uno», aunque de forma limitada: el 64,5% de los encuestados declaraba que también Rajoy era responsable de la intervención española en la guerra, mientras que menos de una cuarta parte, el 23,3 %, lo negaba.

Finalmente, si bien poca gente declaraba que la guerra de Iraq podía influir sobre su voto (sólo el 37,5% de los encuestados), había una neta preferencia por Zapatero por delante de Rajoy: un 37,6% de los encuestados declaraba que quería la victoria electoral del líder socialista, mientras sólo un 33,8% prefería la victoria de Rajoy¹.

Por tanto, a pesar de que los indicadores más simples de intención de voto eran favorables al Partido Popular, un conjunto de indicadores más precisos indicaba una cierta precariedad en esta posición y la existencia de algunos que apuntaban en la dirección del cambio, así como una clara

preferencia por Rodríguez Zapatero por delante de Rajoy.

Naturalmente, eso no quiere decir que todo estuviera decidido *a priori*, ni que la victoria se diese por sentada antes de los atentados de Madrid, pero sí que los procesos de formación de la opinión pública y de movilización de nuevos sectores sociales que se pusieron en marcha a partir del día 11 de marzo tuvieron lugar en un contexto actitudinal que ya se inclinaba hacia la hipótesis de una victoria socialista (o, quizás, hacia una derrota del PP).

Eso nos lleva hacia la segunda dimensión anunciada: las corrientes de difusión de mensajes en esos días. De hecho, durante todo el año precedente se había registrado un fenómeno nuevo y de gran importancia: la creciente presencia de mensajes políticos a través de medios no convencionales. Si tomamos como punto de partida el día de noviembre de 2002 en que se produjo el naufragio del *Prestige*, se estaba asistiendo en el conjunto de España a una intensa movilización de sectores «nuevos», desde los pescadores gallegos hasta la gente del cine, que utilizaba ampliamente instrumentos alternativos en los medios de comunicación de masas dominantes. Radio, prensa y televisión no daban abasto ante la explosión de adhesivos, páginas web, mensajes SMS en los teléfonos móviles o, incluso, la recuperación de la vieja idea del «cine guerrilla» con la producción y exhibición militante de un filme documental sobre la experiencia del gobierno Aznar (*Hay motivo*).

Esta explosión comunicativa deberá estudiarse más extensamente, pero no es este el lugar. Me atrevo, sin embargo, a modo de hipótesis, a aventurar un proceso de pérdida de relevancia e incluso de credibilidad por parte de los media dominantes parecido al que se detectó en Estados Unidos a lo largo del proceso electoral del año 2004. Los nuevos media se pueden permitir ser más analíticos (como las páginas web publicadas por el profesor Vicenç Navarro, de la UPF) o más contundentes (pocas consignas son tan expresivas como el «Nunca mais» que siguió al naufragio del *Prestige*). Pero yendo de un extremo a otro, los nuevos media ponen de relieve cómo los media convencionales pecan de timidez, de falta de amplitud analítica y de excesivo protagonismo de sus profesionales. Por el contrario, los nuevos media movilizados (y movilizados) son esencialmente plurales, anónimos, se plantean como una paleta de instrumentos que cada ciudadano puede utilizar a su antojo y, en definitiva, son en buena

medida interactivos y, por tanto, bidireccionales. El «¡Pásalo!» de los teléfonos móviles en la noche del 13 de marzo ilustra bien todas estas características.

Tras todo esto, repito, la cuestión subyacente es si este conjunto de fenómenos constituye un elemento nuevo, incorporado al paisaje comunicacional, o bien si se trató de un episodio excepcional y, en definitiva, pasajero. Responder a esta pregunta requeriría una compleja estrategia investigadora que no hemos podido desarrollar aquí, pero el carácter extremadamente generacional de muchos de aquellos fenómenos permite, al menos, la sospecha de que se puede tratar de algo que no desaparecerá fácilmente. (De hecho, las elecciones catalanas de noviembre de 2003, situadas de pleno en el contexto descrito, registraron también una presencia considerable de mecanismos comunicacionales alternativos y un notable incremento de la participación electoral. Los resultados tuvieron un tono marcadamente *antiestablishment*, con retrocesos importantes de los dos primeros partidos, CiU y PSC, y un fuerte crecimiento de los partidos más innovadores y «juveniles», ERC e IC-V.)

En tercer lugar, y ahora refiriéndonos estrictamente al escenario de las candidaturas electorales, los acontecimientos de marzo pusieron de manifiesto una paradoja. En la campaña electoral, se entiende que todos los candidatos tienen el derecho y la libertad de expresarse sobre cualquier problema y en cualquier dirección. Ahora bien, los atentados del día 11 llevaron a los partidos políticos a dar por terminada la campaña electoral y a entrar en una fase de silencio: la posible crítica de los intentos de aprovechar en clave electoralista la muerte y el dolor era suficiente para acallar las voces. En otras palabras, se instauraba un período de reflexión mucho más largo que la habitual jornada previa a la votación.

Pero la situación era asimétrica: en régimen parlamentario, el Gobierno sigue en su lugar, en plenitud de funciones y derechos², pero es a su vez parte en el juego electoral, ya que se trata de un nuevo gobierno de partido y es candidato en el proceso electoral. El PP, pues, no hacía campaña, pero al mismo tiempo el ministro del Interior comparecía, ofrecía ruedas de prensa y adelantaba hipótesis sobre la autoría de los atentados. Por eso fue extraordinaria la comparecencia del señor Rajoy la noche del sábado 13 para condenar el cerco de las sedes del PP por grupos de

manifestantes, ya que en ese momento Rajoy no era ministro, sino únicamente cabeza de lista de las candidaturas del PP. El problema de orden público, en caso de que se hubiese producido, era un asunto de la competencia del Gobierno; los candidatos a la elección no tenían ninguna responsabilidad ni atribución en su solución. La identificación partido-gobierno, escenificada en la rueda de prensa de Rajoy, pudo haber sido un elemento clave en la cristalización definitiva de la opinión pública.

Pero, al contrario, si pasamos del plano empírico al plano normativo, parece claro que se produjo una situación que habría que regular mejor de cara al futuro (y sin necesidad, muy al contrario, de que se vuelvan a producir hechos trágicos). El período de reflexión, y da lo mismo una jornada que tres, requiere silencio. Por tanto, las medidas habituales del *pluralismo político* son irrelevantes; es más, no es justo que haya reclamaciones por parte de fuerzas políticas pidiendo más presencia para contraponer las declaraciones formuladas por el Gobierno. Y la razón es, precisamente, que quien se expresa es el Gobierno y no un partido político.

Ahora bien, eso es difícilmente creíble. Es más, con razón o sin ella, las eventuales apariciones de portavoces gubernamentales durante períodos de reflexión siempre será utilizada por las fuerzas políticas exteriores al Gobierno como una justificación para reclamar una mayor posibilidad de expresión. En otras palabras, se plantea la necesidad de promover espacios y actores de comunicación creíblemente independientes y plurales para poder intervenir con autoridad y desde fuera del proceso electoral en los problemas relevantes que puedan surgir en este tipo de momentos. Nos falta la tradición y la experiencia democrática que permita distinguir, en toda intervención gubernamental, lo que es de interés de parte y lo que es acción institucional; es más, aunque exista la mejor de las voluntades, los oponentes siempre pueden sembrar la duda y tildar de partidista toda intervención por parte de los titulares de los poderes públicos. Obviamente, esta problemática va mucho más allá del objeto de estas notas y, por ende, conviene terminar aquí.

Notas

- 1 La encuesta mencionada se puede consultar en la página web www.opina.es. Las otras encuestas publicadas en las semanas anteriores a las elecciones del 14 de marzo, así como la encuesta preelectoral del CIS, constataban fenómenos parecidos; véase en www.cis.es.
- 2 Cabe destacar el hecho extraordinario que el Consejo de Ministros aprobó, al día siguiente de los atentados de Madrid, el Plan Técnico Nacional de la televisión digital terrestre local. No es solamente chocante que en el terrible contexto de aquellos días el Gobierno invirtiera sus energías en establecer el mapa de los «múltiples» de la TDT local, sino que recuerda de manera significativa las adjudicaciones realizadas exactamente el mismo día cuatro años atrás, el viernes anterior a las elecciones generales del año 2000.